

Correo Argentino Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420
	TARIFA REDUCIDA Concesión N° 3146

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

23ª REUNIÓN — 10ª SESIÓN ORDINARIA — 30 DE JUNIO DE 1993

Presidencia del señor vicepresidente del Honorable Senado,
don ORALDO N. BRITOS

y del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
doctor CONRADO H. STORANI

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y señor EDGARDO P. V. MURGUÍA

Prosecretarios: señor JUAN JOSÉ CANALS y doctor DONALDO ANTONIO DIB

SENADORES PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
ALASINO, Augusto
AVELÍN, Alfredo
BITTEL, Deolindo F.
BORDON, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRITOS, Oraldo N.
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CENDOYA, Jorge J.
COSTANZO, Remo J.
DE LA RÚA, Fernando
FADEL, Mario N.
FIGUEROA, José O.
GENOUD, José
HUMADA, Julio C.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MARTÍNEZ, Daniel E.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAZZUCCO, Faustino M.
MIRANDA, Julio
MOLINA, Pedro E.

OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAMUDIO GODOY, Wilfrido
SÁNCHEZ, Libardo N.
SNOPEK, Guillermo E.
SOIANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
VACA, Eduardo P.
VILLARROEL, Pedro G.

AUSENTES, CON AVISO:

OYARZÚN, Juan Carlos
RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.
ROMERO, Juan Carlos
SAN MILLÁN, Julio A.
SOIARI YRIGOYEN, Hipólito

EN COMISION:

BRAVO, Leopoldo
VERNA, Carlos Alberto

POR ENFERMEDAD:

JUÁREZ, Carlos A.

A CARGO DEL PODER EJECUTIVO:

MENEM, Eduardo

SUMARIO

1. Homenajes:

- I. A la memoria del senador Elías Sapag, con motivo de su reciente fallecimiento. (Pág. 1477.)
- II. A la memoria del ex presidente y teniente general don Julio Argentino Roca con motivo del sesquicentenario de su nacimiento. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba un proyecto de resolución del que es autor. (S.-449/93.) (Pág.1487.)

2. Asuntos entrados:

- I. Comunicaciones de la Presidencia. (Página 1490.)
- II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación de la doctora Graciela Elena Marino como jueza nacional del trabajo de la Capital Federal. (P.E.-118/93.) (Pág. 1491.)
- III. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación de la doctora Delia María Ruiz de Galarreta como jueza nacional del trabajo de la Capital Federal. (P.E.-119/93.) (Pág. 1491.)
- IV. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el aumento del aporte argentino al capital social de la Corporación Financiera Internacional. (P.E.-130/93.) (Pág. 1491.)
- V. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Económica y Comercial entre la República Argentina y la República de Turquía, suscrito en Ankara. (P.E.-131/93.) (Pág. 1495.)
- VI. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio con el Gobierno de la República Popular China para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones. (P.E.-132/93.) (Pág. 1499.)
- VII. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo reglamentario de la ley 24.093 (de Actividades Portuarias). (P.E.-133/93.) (Página 1503.)
- VIII. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la concesión de los servicios de agua potable y desagües cloacales al consorcio Aguas Argentinas S.A. (en formación). (P.E.-134/93.) (Pág. 1507.)
- IX. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se adjudican acciones de Centrales Térmicas del Noroeste S.A. a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y otras entidades. (P.E.-135/93.) (Pág. 1509.)
- X. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se adjudican acciones de Cen-

tral Térmica San Nicolás S.A. a Inversora de San Nicolás S.A. (P.E.-136/93.) (Página 1509.)

- XI. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se adjudican acciones de Centrales Térmicas del NEA S.A. a IATE S.A. (P.E.-137/93.) (Pág. 1510.)
- XII. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 1511.)
- XIII. Proyecto de ley en revisión por el que se transfiere a título gratuito un inmueble a la Municipalidad de Larroque, Gualagaychú, Entre Ríos. (C.D.-15/93.) (Página 1511.)
- XIV. Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio con la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre Cooperación para Combatir el Uso Indebido y la Producción y Tráfico Ilícito de Estupefacientes. (C.D.-16/93.) (Página 1511.)
- XV. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 22.853 respecto a las unidades médicas que practican diálisis para la depuración de la sangre. (C.D.-17/93.) (Pág. 1513.)
- XVI. Proyecto de ley en revisión por el que se modifican las leyes 20.744 y 21.297 (contrato de trabajo) sobre derechos de la mujer trabajadora en situación de excedencia. (C.D.-18/93.) (Pág. 1514.)
- XVII. Proyecto de ley en revisión por el que se declara "monumento natural nacional" el tramo del río Uruguay donde se localizan los saltos conocidos como "saltos del Moconá". (C.D.-19/93.) (Pág. 1515.)
- XVIII. Proyecto de ley en revisión por el que se ratifica el Convenio 173 sobre Protección de los Créditos Laborales en caso de insolvencia del empleador, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo de la O.I.T. (C.D.-20/93.) (Pág. 1515.)
- XIX. Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la recomendación relativa a la condición del artista aprobada por la Conferencia General de la UNESCO. (C.D.-21/93.) (Pág. 1521.)
- XX. Proyecto de ley en revisión por el que se modifica el Código Penal respecto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. (C.D.-22/93.) (Pág. 1530.)
- XXI. Modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión sobre titularización del personal docente directivo. (S.-777, 817, 843 y 853/92.) (Pág. 1531.)
- XXII. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 1532.)

al seguimiento ideológico. (S.-455/93.) (Pág. 1576.)

LXVIII. Proyecto de declaración del señor senador Aguirre Lanari por el que se expresa satisfacción por la cancelación en efectivo de la deuda del sistema previsional con los jubilados y pensionados mayores de 85 años. (S.-456/93.) (Pág. 1576.)

LXIX. Proyecto de comunicación del señor senador Lafferrière por el que se solicitan informes sobre el perjuicio que ocasiona a la industria electrónica nacional la desgravación de productos importados. (S.-457/93.) (Pág. 1577.)

LXX. Proyecto de ley del señor senador de la Rúa por el que se modifica la ley 19.134 (adopción de menores no emancipados) respecto al estado de abandono del menor a adoptar. (S.-458/93.) (Pág. 1577.)

LXXI. Proyecto de comunicación del señor senador Molina por el que se solicita la remoción y traslado de los buques pesqueros "Marcelino de Cirisa" y "Polaris" encallados en Mar del Plata, Buenos Aires. (S.-462/93.) (Pág. 1580.)

LXXII. Proyecto de ley del señor senador Avelín por el que se modifica la ley 24.049 (transferencia de servicios educativos) respecto a la situación previsional del personal docente transferido. (S.-463/93.) (Pág. 1580.)

3. **Lectura y aprobación del plan de labor para la sesión de la fecha.** (Pág. 1581.)

4. **A moción del señor senador Genoud se considera sobre tablas y se aprueba por la Cámara constituida en comisión, el proyecto de ley del señor senador de la Rúa y otros señores senadores por el que se dispone la construcción de un monumento a la memoria del ex presidente doctor Arturo Umberto Illia.** (S.-465/93.) (Pág. 1581.)

5. **Moción del señor senador Molina para pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 16 una vez finalizada la reunión del día de la fecha. Se aprueba.** (Pág. 1588.)

6. **Consideración en general del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Familia y Minoridad en los proyectos de ley de varios señores senadores sobre modificaciones al Código Penal respecto de la filiación, sustracción y tráfico de menores.** (S.-1.247 y 1.256/92 y S.-31, 145 y 186/93.) Se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 16. (Pág. 1589.)

—A las 17 y 50 del miércoles 30 de junio de 1993:

Sr. Presidente (Britos). — La sesión está abierta.

1

HOMENAJES

1

Sr. Presidente (Britos). — Corresponde rendir los homenajes acordados.

En primer lugar, se rendirá homenaje a la memoria del señor senador don Elías Sapag.

Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente: acabo de estar con la familia del señor senador Elías Sapag, y ahora ocupo esta banca para dar comienzo a este solemne acto que el Senado de la Nación ha dispuesto para rendirle homenaje a un amigo, a un compañero, a un hermano. Porque Elías Sapag fue para mí todas esas cosas. Casi cuarenta años de compartir tareas con él han establecido un paralelismo que en este momento me coloca en la situación de decir estas palabras con el tono emocionado que corresponde para quien se ha visto herido en lo más profundo de sus afectos.

Quisiera decir poco, pero no puedo menos que mencionar algunas cosas para caracterizar la naturaleza de la persona a quien hoy le rendimos homenaje.

Elías Sapag fue un hombre de una trayectoria peculiar. Desde la más temprana juventud estuvo tan dedicado al servicio público que hace poco me decían que estableció un perfil único que, según creo, va a ser muy difícil, si no imposible, reemplazar.

Sapag empezó desde muy joven. Tenía poco más de veinte años cuando estaba en un lugar que era un desierto. Ahora quien circula por la provincia del Neuquén pasa por la capital, por el asfalto y llega a Cutral-Có y a Zapala y no tiene la menor idea de lo que era eso hace cuarenta o cincuenta años.

Cuando se estableció Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Plaza Huincul, su perímetro era un polígono; se llamaba el Polígono de YPF donde tenían acceso los trabajadores. Pero los que aspiraban a trabajar o no tenían vivienda se establecían en un lugar denominado "Barrio peligroso", en medio de arenales vivos, de médanos. En esa zona empezó a vivir la familia Sapag. La madre tenía que traer el agua en bordelesas que ro-

de suma importancia y viene siendo postergado a lo largo de varias sesiones— no alcance a terminarse en el día de la fecha, la Cámara pase a cuarto intermedio hasta mañana. Concretamente, hago moción de que a las 21 y 15, 21 y 30, pasemos a cuarto intermedio hasta mañana a las 16 o 17, de acuerdo a lo que propongan los presidentes de bloque. Pero advierto la necesidad de que mañana —que es día de tablas— trabajemos, porque hay una propuesta que ha requerido la atención de los señores senadores. Hay diversos proyectos presentados que tienen dictamen de comisión. Si no tuviéramos suficiente tiempo como para que esté aprobado a las 21 y 30, como estamos con quórum estricto, solicito que se vote pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 16 horas.

Sr. Genoud. — Señor presidente: adhiero al cuarto intermedio para mañana a las 16.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente: pediría que el cuarto intermedio fuera hasta mañana a las 10 y 30 u 11, ya que creo que será mucho más productivo.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: las 16 es la hora oportuna —a nuestro juicio—, toda vez que por la mañana se reunirán muchas comisiones. Sin ir más lejos, tenemos una audiencia pública que reúne a cinco comisiones: Industria, Ciencia y Tecnología, Comercio, Asistencia Social y Salud Pública y Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios.

De tal modo que habiendo previsto un sinnúmero de tareas a desarrollar en horarios de la mañana, habíamos pensado con los presidentes de bloque que la sesión continuara recién a las 16. Esto como explicación a la inquietud del señor senador por San Juan.

Sr. Presidente (Britos). — Se va a votar la moción de pasar a cuarto intermedio a las 21 y 15 y continuar mañana a las 16 horas.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Se procederá en consecuencia.

6

FILIACION, SUSTRACCION Y TRAFICO DE MENORES

Sr. Presidente (Britos). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos

Penales y Regímenes Carcelarios y de Familia y Minoridad en los proyectos de ley de varios señores senadores sobre modificaciones al Código Penal respecto de la filiación, sustracción y tráfico de menores. (Orden del Día N° 99.)

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: no se ha aprobado el temario concertado en la reunión de labor parlamentaria.

Sr. Presidente (Britos). — Lo puse en consideración antes, señor senador.

Sr. Genoud. — No, señor presidente. Cuando pedí el uso de la palabra para solicitar el tratamiento sobre tablas del homenaje al doctor Arturo Illia se iba a someter a votación y no se hizo.

Sr. Presidente (Britos). — Posteriormente lo puse en consideración y fue aprobado.

Sr. Genoud. — Quiero consignar que si omití esto en su oportunidad y no advertí que se estaba votando solicito excusas. Pero en la reunión de presidentes de bloque de ayer expresé que iba a pedir el tratamiento sobre tablas de un proyecto de mi autoría por el que se faculta al presidente del cuerpo para que éste redistribuya los espacios dentro del Congreso de la Nación. Los presidentes de bloque allí presentes no me dejarían mentir, de tal modo que solicito que se tenga presente y se dé por incluido este tema para ser tratado sobre tablas en su oportunidad.

Sr. Presidente (Britos). — Le recuerdo al señor senador por Mendoza que estaba circulando el acta para la firma cuando usted hizo mención de este proyecto.

Sr. Genoud. — Dejo constancia de que en la oportunidad de solicitar tratamientos sobre tablas habré de insistir con este tema.

Sr. Presidente (Britos). — Será tenido en cuenta mañana, señor senador.

Continuamos con la consideración del Orden del Día N° 99.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senador:

Vuestras comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Familia y Minoridad han considerado los proyectos de ley del señor senador Lafferrière (S.-1.247/92), incorporando al título I del Código Penal el capítulo sobre "Delitos contra la identidad, la integridad física personal, la libertad y la vida de los menores"; del señor senador Romero Feris (S.-1.256/92), incorporando

al título I capítulo VII denominado "Tráfico de menores"; del señor senador Molina (S.-31/93), incorporando el artículo 142 ter al Código Penal, previendo sanciones para aquellos que sustrajeren, retuvieren u ocultaren menores con el fin de cambiar su filiación; de la señora senadora Rivas (S.-145/93), sustituyendo diversos artículos del Código Penal en lo que respecta a la sustracción de menores; y del señor senador de la Rúa (S.-186/93), sustituyendo los artículos 138 y 139 del Código Penal en lo que respecta a sustracción de menores; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Derógase el inciso 2º del artículo 81 del Código Penal.

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 106 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 106: El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándola en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años.

La pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima.

Si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión.

Art. 3º — Sustitúyese el artículo 107 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 107: El máximo y el mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente, serán aumentados en un tercio cuando el delito fuera cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquéllos, o por el cónyuge.

Art. 4º — Sustitúyese la denominación del capítulo II, título IV, libro II, del Código Penal por el de "supresión y suposición del estado civil y de la identidad".

Art. 5º — Sustitúyese el artículo 138 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 138: Se aplicará prisión de 1 a 4 años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterar o suprimiere el estado civil de otro.

Art. 6º — Sustitúyese el artículo 139 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 139: Se impondrá prisión de 2 a 6 años:

1º A la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan.

2º Al que, por un acto cualquiera y en forma ilegítima, hiciere incierto, alterar o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare.

Art. 7º — Incorpórase como artículo 139 bis del Código Penal el siguiente texto:

Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años el que facilitare, intermediare, promoviere o

de cualquier modo interviniera en la perpetración de los delitos comprendidos en este capítulo, haya mediado o no, precio o promesa remuneratoria, ejercido amenaza o abuso de autoridad.

Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble de tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional de la salud que cometa alguna de las conductas previstas en este capítulo.

Art. 8º — Sustitúyese el artículo 146 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 146: Será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años el que sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare.

Art. 9º — Sustitúyese el artículo 292 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 292: El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de 6 meses a 2 años, si se tratare de un instrumento privado.

Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de 3 a 8 años.

Para los efectos del párrafo anterior están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento.

Art. 10. — Sustitúyese el artículo 239 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 239: Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar.

Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de 3 a 8 años.

Art. 11. — Sustitúyese el artículo 297 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 297: Para los efectos de este capítulo quedan equiparados a los instrumentos públicos de los testamentos ológrafos o cerrados, los certificados de parto o de nacimiento, las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador, no comprendidos en el artículo 285.

Art. 12. — Incorpórase como último párrafo del artículo 44 del Código Penal el siguiente texto:

La reducción de la pena establecida en este artículo no será aplicable cuando el delito de que se

trate hubiera comenzado a ejecutarse contra menores de 10 años.

Art. 13. — Incorpórase en la parte final del párrafo primero del artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente texto:

... salvo que se le impute alguno de los delitos previstos por los artículos 139, 139 bis y 146 del Código Penal.

Art. 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 117 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 4 de junio de 1993.

Augusto Alasino. — Fernando V. Cabana.
— Jorge D. Solana. — Olijela del Valle
Rivas. — José O. Figueroa.

En disidencia parcial:

— José Genoud.

En disidencia parcial:

Conrado Storani.

En disidencia parcial:

Fernando de la Rúa.

En disidencia parcial:

Ricardo E. Lafferrère.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Señor presidente:

A tenor del artículo 31 de la Constitución Nacional, cuando el Congreso de la Nación ratificó por ley 23.849 la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, incluyó en el plexo normativo supremo de la Nación el reconocimiento de los dos valores fundamentales y básicos, que se traducen como derechos: el derecho intrínseco a la vida e, inmediatamente, el derecho intrínseco a la identidad personal.

La Argentina estaba madura para esto porque había sufrido no solamente el desmedro de ese derecho a lo largo de décadas, sobre todo en los sectores populares, sino también la brusca afectación de esos derechos sobre niños tanto de aquéllos como de sectores medios, en función de las circunstancias políticas de la década del 70. El dolor permitió la formación de una conciencia muy profunda sobre este tema. Es decir, no solamente el "derecho a ser" sino a "ser yo".

En definitiva, aparece en la legislación argentina un bien jurídico tutelado o protegido, distinto del estado civil cual es el de la identidad, en un sentido omnicompreensivo, incluyente del estado civil.

En concordancia con lo expresado, se suprime el apartado segundo del artículo 81 del Código Penal, porque entendemos que el bien "vida" es superior, y en esto no caben dudas, a la protección legal de la honra pública de una mujer.

El homicidio de un recién nacido cometido por su madre soltera o adúltera puede ser atenuado por todas las circunstancias que deben ser tenidas en cuenta por quien juzga (artículos 40 y 41 del Código Penal) y aún ser

exento de pena según el artículo 34, inciso 1º, del mismo.

La desaparición de esta figura abolirá el privilegio legal de los padres, hermanos, marido e hijos injustificadamente incluidos en ésta.

Con respecto al abandono — artículo 106 del Código Penal — y a los efectos de armonizar en forma integral las penas de aquellos delitos que, amén de la identidad, tienen como víctimas a menores de diez años; es que proponemos incrementar sus montos. De igual manera se elimina la última parte del artículo 107 del Código Penal por configurar un privilegio inaceptable sobre el honor de aquella persona que abandona una criatura.

En la interpretación de los delitos contra el estado civil, tanto la doctrina como la jurisprudencia se han mostrado contradictorias teniendo en cuenta aspectos típicos de estos delitos en función de los elementos subjetivos — el ánimo de causar un perjuicio distinto —, independientemente de afectar el estado civil. Consecuentemente se deroga la frase "con el propósito de causar perjuicio" (artículo 138 del Código Penal) para darle más luz al intérprete. Ello obedece a que la expresión mencionada generó conflictos hasta tal punto que en algunos casos el tráfico de niños quedaba impune, porque no concurría la falsedad ideológica de instrumento público agravado so pretexto que este tipo se subsumía en la suposición de estado civil. Pero, cabe indicar que, tampoco se configuraba ésta porque, precisamente, no existía intención de perjuicio.

En virtud del inciso 2º del artículo 139 del Código Penal se introduce la lesión al interés jurídico de la identidad como una figura autónoma y distinta a la del artículo 138 que se limita a la protección del estado civil. Se extiende también, mediante la fórmula que prescribe el artículo 146 *in fine* — "y el que lo retuviere u ocultare" —, la responsabilidad a quien recibe y acepta a un menor de diez años al que de alguna manera se le haya suprimido la identidad.

Haciéndonos eco de las opiniones de importantes juristas en el sentido de que existe un vacío legal con respecto a la punición del denominado intermediario es que propugnamos la incorporación del artículo 139 bis que incrimina "al que facilitare, intermediare, promoviere o de cualquier modo interviniere..." en la comisión de los delitos contra el estado civil y de la identidad. Ello constituye, a nuestro entender, una respuesta adecuada al proceder del intermediario que aparece como el individuo que de ninguna manera puede ser tolerado en una sociedad civilizada dado que no aparece, como se suele afirmar supliendo la figura negativa del burócrata encargado de la adopción ni la del juez de menores que tarda en decidir. Sino que aparece mediando, no solamente por dinero; a veces por poder, ante situaciones de angustia y ansiedad que viven los miembros más vulnerables de la sociedad. Entre los demás partícipes indefectiblemente, no pueden quedar fuera de la fuerte incriminación del artículo 139 bis los funcionarios públicos y los profesionales de la salud que facilitan, permiten o cometen este tipo de hechos. Esto constituye el núcleo fundamental de un derecho que debe brindar verdaderas garantías al ciudadano frente al poder del Estado.

Dentro del marco general de agravación de penas, la sustracción de un menor de diez años —(artículo 146 del Código Penal)—, debe generar una mayor severidad que la forma agravada del delito de supresión de la identidad —(artículo 139 bis)—, habida cuenta de que no sólo se trata de la violación de la identidad del menor sustraído, sino también su calidad de delito contra la libertad.

En cuanto a la falsificación material y la ideológica —artículos 292 y 293 del Código Penal respectivamente—, es importante no dejar de soslayar la derogación de la expresión “con el propósito de causar perjuicio”, requisito típico que exigía un daño real o posible. De esta manera, a partir de ahora no hay falsedad que sea inocua porque siempre genera un daño a la fe pública, y en especial medida, a la identidad de aquellos menores que se intenta fraguar por cualquier tipo de falsificación.

Otro cambio fundamental que introduce esta reforma es la inclusión de los certificados de parto y de nacimiento como aquellos idóneos para acreditar la identidad de las personas. También es de gran importancia la constitución de los mismos como instrumentos públicos ya que de no haber mediado una mención expresa serían instrumentos privados no destinados a acreditar la identidad de las personas. Todo esto implica que hoy, el hecho de ser hijo de sus padres no depende de que la madre lo reconozca en el Registro Civil en el acto de la inscripción, sino que está dependiendo de un certificado médico de parto o sea, de la realidad biológica misma.

En virtud de la misión que el artículo 242 del Código Civil encomienda a estos certificados determinantes de identidad y filiación materna, es necesario que el mismo cuente con todas las garantías del instrumento público. Esto es así porque este certificado determina la inscripción del nacimiento e incluso, la emisión de un documento de identificación como es el documento nacional de identidad, prácticamente en el mismo acto.

En definitiva, la respuesta del derecho penal a esta problemática es el otorgamiento de la calidad de instrumento público y la entidad suficiente para acreditar la identidad, a los efectos de engendrar una mayor responsabilidad criminal a los autores de tal falsificación.

La trascendencia de este tema, la fragilidad con la que la identidad está tutelada, la indefensión de los menores de diez años, la condición sociocultural —en la mayoría de los casos— de los padres de las víctimas nos instan a punir con la pena correspondiente a los autores, a los que cometan en grado de tentativa —cuando la figura particularmente lo admita—, los delitos en los que sean sujetos pasivos menores de diez años.

En el mismo orden de ideas, proponemos una modificación al régimen general de excarcelación previsto por el artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación. En tal sentido se propugna una excepción a la procedencia de la excarcelación cuando el delito imputado sea alguno de los descritos por los artículos 139, 139 bis y 146 del Código Penal, siempre que la víctima sea un menor de diez años, fundada en la protección que merece el bien jurídico tutelado.

La mayor incriminación para esta clase de delitos que involucra a todos los que de cualquier manera intervienen en su perpetración no supone desconocer la realidad en la cual se hallan inmersos amplios sectores de la

sociedad, específicamente aquellas personas que condicionadas por factores socioculturales, deciden desprenderse voluntariamente de sus hijos.

En atención a lo expuesto y convencidos de que la desincriminación en forma absoluta de los padres causaría un efecto criminológico inmediato no deseado, cual es que éstos carguen con toda la culpa que pudiera corresponder a los demás partícipes, siendo ésta la conclusión que surge de la práctica de los jueces de menores cuya experiencia hemos tenido en cuenta para la materialización del presente.

De todas maneras queda abierta la posibilidad de que el juez, sobre la base de lo dispuesto por el artículo 34 del Código Penal, al evaluar las circunstancias del caso, pueda llegar a eximir de la pena a los padres que motivados por un estado de necesidad se hayan desprendido de sus propios hijos.

Por último, agradecemos el invalorable aporte brindado por el señor presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctor Jorge Casanova; el señor juez de cámara de los tribunales orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, doctor Martín Federico; el señor juez penal de Menores, doctor Víctor G. Pettigiani, y por el señor presidente del Consejo Nacional del Menor y la Familia, doctor Atilio Alvarez.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Augusto Alasino.

ANTECEDENTES

I

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Incorpórase al título I del Código Penal el siguiente capítulo:

Capítulo VII

Delitos contra la identidad, la integridad física, la libertad y la vida de menores

Artículo 131 bis: Será reprimido con prisión de seis a diez años el que sustrajere a un menor de edad de la guarda de sus padres, tutores, guardas o responsables legales.

La misma pena se aplicará a todos los partícipes del hecho, así como a quienes dolosamente recibieren, aceptaren o de cualquier forma se hicieren cargo del menor sustraído.

Artículo 131 ter: Será reprimido con prisión de dos a cuatro años el que entregare a otro o recibiere a un menor de edad por cualquier procedimiento que signifique alterar ilegítimamente su identidad.

Artículo 131 quater: Si el hecho descrito en el artículo 131 bis se realizare con la finalidad de entregar el menor a terceras personas, la pena será de seis a quince años.

Si el hecho concluyera con la entrega del menor a terceras personas a cambio de una retribución, la pena será de diez a quince años.

Artículo 131 quinquies: Si el menor sufriera en ocasión de los hechos previstos en los artículos anteriores o con posterioridad lesiones de las descritas en el artículo 91, la pena será de quince a veinticinco años.

Si el menor sufriera la muerte, la pena será de reclusión perpetua.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ricardo E. Lafferrière.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La sustracción de menores para su comercialización se ha convertido, junto al tráfico de estupefacientes, en uno de los hechos aberrantes más difundidos internacionalmente y de mayor gravedad.

No es necesario describir las características repugnantes de este hecho. La finalidad de la sustracción de personas recién nacidas y de menores de edad tiene dos conclusiones: la venta del bebé a parejas sin hijos del país o del exterior, y la utilización del cuerpo de los niños como proveedores de órganos para trasplantes, hecho que hasta ahora, en mi conocimiento, parece darse en países extranjeros pero no aún en el país. La tecnología existente permitiría obviamente también destinar a esta finalidad a los niños raptados dentro del país.

El Código Penal, sancionado cuando esta clase de hechos no ocurrían, sea porque los casos de parejas sin hijos dispuestas a "comprar" niños eran realmente escasos o desconocidos, o porque la tecnología médica disponible no alcanzaba para el segundo caso, no tiene sanción para la conducta descrita, lo que ha provocado el reclamo de magistrados que aun queriendo perseguir esta práctica aberrante no tienen figura legal dentro de la cual encuadrarla penalmente.

Este proyecto tiende a cubrir el vacío legal. La importancia y urgencia de su sanción no necesita ser destacada ni fundada mayormente.

Incorpora un nuevo capítulo en el título I del libro II, por entender que el bien jurídicamente protegido es la identidad, la integridad física personal, la libertad y la vida de las personas.

Aun contando esta conducta con elementos genéricos del "rapto", no parece adecuada la ubicación en ese título en razón de que, más que de un "delito contra la honestidad", de los contemplados en el título II se trata de un verdadero delito contra la identidad, la integridad física, la libertad y eventualmente la vida de las personas.

En efecto, por sus características, no es tampoco un delito que afecte sólo ni principalmente la "libertad". El valor de la libertad, protegido por el título V, supone en la víctima la posibilidad de resistencia o al menos de albedrío, que no se da, por sus características, en los niños sin discernimiento.

La figura protege la identidad pero no parece adecuado vincularlo a las conductas del título IV ("Contra el estado civil"), ya que implica conductas muchísimo más graves y repugnantes a la moral social que las mencionadas en este título.

El delito agrede simultáneamente, en forma directa o por las características de un delito de peligro, cuatro va-

lores esenciales de las personas: su identidad, su integridad física, su libertad y su vida.

Las figuras que se definen son:

1) La sustracción de menores de la guarda de sus padres, tutores o guardas legales (artículo 131 bis). Este delito está configurado por la acción de sustraer el menor a la guarda de quien tiene el legítimo derecho y deber de cuidar de él. Protege a los menores de la acción conocida popularmente como "robo de niños", que, con las más diversas modalidades, se caracteriza por efectuar sobre el menor procedimientos parecidos a la figura del delito contra la propiedad, convirtiendo al menor poco menos que en una cosa.

La pena se extiende a los partícipes del hecho, así como a quienes entreguen o reciban los niños víctimas de la figura penal.

El siguiente artículo prevé y sanciona la conducta de quien entregue a otro un niño o lo recibiere por un procedimiento que signifique alterar ilegítimamente su identidad. La norma apunta a defender la identidad del menor, que además de ser un valor reconocido por convenios internacionales ratificados por la Nación, es negada cuando se "anota" como hijo propio un niño ajeno o se falsea dolosamente su identidad, sin ningún procedimiento de adopción o entrega del niño con participación del juez de menores, por la forma legal pertinente.

Si el hecho culminara con la entrega del menor sustraído a terceras personas, la pena prevista se agrava, y en los casos en que esa entrega se efectuara a cambio de una contraprestación, el agravamiento es mayor en razón de que quedaría patentizada una falta absoluta de respeto a la dignidad humana, al venderse una persona.

Los dos siguientes artículos protegen a los menores de una actitud profundamente más criminal que las anteriores: el secuestro de menores para extraerles sus órganos con destino a trasplantes o cualquier otra finalidad vinculada con la investigación o fabricación de drogas, medicamentos o utilización con fines terapéuticos en terceras personas. Este procedimiento debe ser previsto con el máximo de la sanción legal, no sólo por la gravedad intrínseca, sino porque sus víctimas no tienen posibilidad alguna de defensa ya que, en muchos casos, hasta carecen de la más elemental capacidad de discernimiento. El máximo de la pena prevista en el código —reclusión perpetua— se establece para los casos en que el hecho termine con la muerte de la víctima.

Por estos motivos solicito del cuerpo la sanción del presente proyecto con el pedido del más urgente pronto despacho.

Ricardo E. Lafferrière.

II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Incorpórase al título I del Código Penal el capítulo VII denominado: tráfico de menores.

Capítulo VII

Tráfico de menores

Artículo.... Será reprimido con prisión de tres a ocho años el que entregare o vendiese a su hijo

menor eludiendo los mecanismos legales vigentes para una adopción legal.

Art. 2º — Será reprimido con prisión de tres a diez años el que promoviese o facilitase el tráfico de menores de edad dentro del territorio de nuestro país y con los fines descritos en el artículo anterior.

La prisión será de cuatro a diez años si se tratase de una organización dedicada a dichos fines y/o en connivencia con organizaciones internacionales.

Art. 3º — La prisión será de tres a quince años si el delito se cometiese con miras deshonestas o para practicar la prostitución o corrupción de los menores.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José A. Romero Feris

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Existe un vacío en nuestro Código Penal vigente que requiere una urgente legislación, y es el tema del tráfico de menores, especialmente de niños de muy corta edad, en el cual tanto particulares como organizaciones delictivas del país, asociadas con organizaciones internacionales, se encuentran abocadas impunemente al negocio deleznable del tráfico con niños de distintas edades y con distintos fines.

Estas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, especulan con las necesidades de la gente para lucrar con dicha actividad.

El presente proyecto de ley tiende a cubrir ese vacío jurídico que permite la impunidad total de esta clase de gente que trafica con la vida de seres humanos.

La tipificación de dicho delito encuentra su inclusión dentro del capítulo de los delitos contra las personas y por la trascendencia del mismo debe ser fuertemente castigado.

Con la introducción del primer artículo se pretende reprimir con mucha dureza a los que entreguen sus hijos o faciliten la intermediación de dicho tráfico; siendo que resulta inadmisibles desde todo punto de vista el canje de sus hijos por sumas de dinero, por ocultar su vergüenza o por otro motivo que puedan hacer llevar a los padres o a la madre a efectuar dicho acto repudiable desde cualquier punto de vista.

Debemos tener en cuenta que en el proyecto presente se contempla la figura de los menores en general, ya que dicho tráfico se efectúa en la actualidad desde niños recién nacidos hasta menores de distintas edades, frecuentemente estos últimos utilizados para el ejercicio de la prostitución.

De la misma forma, el artículo segundo contempla el caso de las personas que facilitasen dicha tarea (es decir, los intermediarios que se encargan de acercar a las partes para el negocio), y la pena se agrava si los mismos forman una organización dedicada específicamente a dichos fines, sobre todo en connivencia con organizaciones internacionales.

El último artículo contempla el caso de que dicho tráfico de niños esté destinado a la prostitución o a facilitar dicho tráfico. La pena contemplada es la más dura de las previstas para este tipo de figura, siendo que es la más

reprobable, desde todo punto de vista. La admisión de este negocio resulta repugnante debiendo ser castigado con todo el rigor de la ley.

Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

José A. Romero Feris.

III

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Incorporar como artículo 142 ter del Código Penal, el siguiente:

Artículo 142 ter: Se impondrá prisión o reclusión de 3 a 10 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de generar o crear una filiación diferente a la que corresponda. La pena será de 5 a 15 años de prisión o reclusión:

1. Si la víctima fuere menor de 10 años.
2. Si fuere cometido por ascendiente, hermano o colateral hasta el tercer grado de parentesco.
3. Si el acto fuere cometido para obtener un precio o rédito económico o material o bajo promesa remuneratoria.
4. Si resultare daño a la persona o salud del ofendido.
5. Si fuere cometido por autoridad pública o por profesional de la salud.
6. Si se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública.
7. Si se cometiese con el concurso de más de dos personas.

Si resultare la muerte de la persona, la pena será de prisión o reclusión perpetua pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pedro E. Molina.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

En los últimos años, la humanidad ha fortalecido su conciencia respecto de los derechos humanos, generando legislación e instituciones que resguardan el patrimonio de la libertad de las gentes. Sin embargo, todavía se desarrollan prácticas derivadas del desprecio por la entidad humana como la llamada compraventa de niños que nos conmueve con preocupante asiduidad.

Por eso propongo una tipicidad penal específica de este accionar, no previsto en particular por el Código Penal vigente.

El proyecto de ley prevé también fuertes sanciones que pueden agravarse hasta llegar a la prisión o reclusión perpetua en caso de muerte de la víctima, tratando de describir las conductas agravadas que merecen sanción específica.

Al bien individual considerado, debe agregarse el interés social propio del carácter del orden público de la

identidad, así como también la preservación de la verdadera con el fin de garantizar la vigencia de los impedimentos matrimoniales basados en la consanguinidad.

Por estas breves razones y por la gravedad de las prácticas delictivas aquí sancionadas, es que solicito la aprobación del presente proyecto.

Pedro E. Molina.

IV

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 146 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 146: Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince años, el que sustrajere u obtuviere ilegalmente a través del otorgamiento de beneficio económico, la tenencia de un menor de diez años sacándolo del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él; y el que lo retuviere u ocultare.

Artículo 146 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años, el que condujere al extranjero a un menor de diez años, sin la autorización de sus padres, tutor o persona encargada de él, obteniendo la autorización a través del otorgamiento de un beneficio económico con el propósito de someterlo ilegalmente al poder suyo o de otro.

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 147 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 147: Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años el que, hallándose encargado de la persona de un menor de diez años, no lo presentara a los padres o guardadores que lo solicitaran o no diere razón satisfactoria de su desaparición.

Art. 3º — Sustitúyese el artículo 148 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 148: Será reprimido con prisión de dos a cinco años, el que indujere a una mayor de diez años y menor de quince, a fugar de casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona.

Art. 4º — Sustitúyese el artículo 149 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 149: Será reprimido con prisión de dos a cinco años, el que ocultare a las investigaciones de la justicia o de la policía, a un menor de quince años que se hubiere sustraído a la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido.

La pena será de tres a siete años si el menor no tuviere diez años.

Artículo 149 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinte años el que organice o financie cualquiera de las conductas ilícitas descritas en los artículos 146; 146 bis; 147; 148 y 149, del Código Penal.

Artículo 149 ter: Será reprimido con prisión de dos a cinco años, al que facilitare, aunque sea a tí-

tulo gratuito, un lugar o elementos para que se lleven a cabo algunos de los hechos previstos en los artículos 146; 146 bis; 147; 148; 149 y 149 bis del Código Penal.

Artículo 149 quater: Las penas previstas en los artículos precedentes serán aumentadas en un tercio del máximo a la mitad del mismo sin que las penas puedan exceder al máximo legal de la especie de la pena de que se trate:

- a) Si los hechos se cometieran con engaño, violencia o intimidación;
- b) Si en los hechos intervinieren tres o más personas organizadas para cometerlos;
- c) Si los hechos se cometieren por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos tipificados en los artículos 146; 146 bis; 147; 148; 149; 149 bis del Código Penal;
- d) Cuando el delito se cometiera en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva cultural o social o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicas o en otros lugares a los que los menores acuden con fines educativos, asistenciales, deportivos, sociales o sanitarios.

Artículo 149 quinto: Será reprimido con prisión de dos a cinco años, el que sin haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos previstos por los artículos mencionados en el inciso c) del artículo 149 quater del Código Penal, interviniera en cualquier acto de contenido económico proveniente de los delitos referidos en los mencionados artículos del Código Penal, siempre que hubiere conocido ese origen o lo hubiere sospechado.

A los fines de la aplicación de este artículo no importará que el hecho originante de los recursos económicos de que se tratase se haya producido en territorio extranjero.

Art. 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Olijela del Valle Rivas.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La crónica policial de días recientes ha hecho surgir con dramática potencia un fenómeno perverso que afecta gravemente a nuestra sociedad. Se trata del tráfico de niños que suele originarse en la sustracción o "compra" de los mismos, por parte de personas u organizaciones, que, a su vez, las transfieren —dentro o fuera del país— para satisfacer malentendidas apetencias de paternidad o maternidad por parte de personas o familias generalmente carentes de posibilidades de tener hijos propios. Así, en vez de transitar las vías legales de adopción, se acude, de manera mediata, a vías delictivas. Estas constituyen —es obvio decirlo— una verdadera lacra y un proceder inadmisibles en una sociedad civilizada, que se precie de su patrimonio espiritual, humanista y cristiano.

Se hace pues, necesaria la reforma del Código Penal, perfilando más precisa y rigurosamente las figuras delictivas referidas al tema y creando otras nuevas aptas para afrontar, tanto la creciente expansión de tales repudiables prácticas, cuanto las nuevas modalidades que asumen las conductas ilícitas vinculadas al problema.

La presencia de la mujer en el Parlamento se justifica, precisamente por la especial inclinación de ella a propiciar la adopción de instrumentos legales tendientes a la protección de la niñez y al combate contra flagelos que, como el que se quiere erradicar, significan una grave agresión contra la sensibilidad femenina y los valores de la familia.

Especial atención han merecido en el precedente proyecto los aspectos vinculados al deleznable comercio, a la trata de niños, que constituye uno de los aspectos más afligentes, en cuanto dotados de extrema peligrosidad, de la cuestión que abordamos. Es así que se crean figuras penales destinadas a punir tal tipo de conductas, en especial cuando ellas son perpetradas a través de organizaciones o asociaciones dedicadas al infame comercio.

También se propicia un drástico agravamiento de las penas que —a nuestro juicio— deben resultar efectivamente disuasivas por su cuantía, para quienes se encuentran encarrilados en tan serios y negativos itinerarios criminosos.

Finalmente, es preciso tener en cuenta que, además de reforzar y perfeccionar la legislación penal, resulta imperiosa la pronta sanción de una ley nacional constitutiva de un verdadero "código de minoridad", capaz de abordar la cuestión desde perspectivas pluridimensionales, que ataquen la raíz de los problemas que afectan a la niñez, a la cual debe —realmente— otorgársele status de privilegio, tanto por razones derivadas de exigencias de nuestra cultura, cuanto por motivaciones universales que hacen a la valoración de la dignidad y los derechos de la persona.

Olijela del Valle Rivas.

V

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 138 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 138: Se aplicará prisión de uno a seis años al que por un acto cualquiera hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro.

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 139 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 139: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial de tres a seis años el que por imprudencia o negligencia, impericia en su arte o profesión, facilitare o diere ocasión a que se produzca alguno de los hechos previstos en el artículo anterior. La pena se elevará al doble si quien así actuara fuera miembro, integrante, directivo o dependiente de un organismo público o privado cuyos fines fueran intervenir en

adopciones y el agente actuara para su beneficio amparándose en los privilegios de su cargo o en ocasión de éste.

Art. 3º — Agrégase como artículo 139 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 139 bis: Será reprimido con prisión de tres a seis años el que facilitare, intermediare o retuviera a un menor con el fin de darlo en adopción por cualquier contraprestación.

La pena será de tres a ocho años si intervinieran dos o más personas. Se aplicará la misma pena cuando el autor hiciera de ello su actividad habitual.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fernando de la Rúa.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Los hechos acaecidos en estos últimos días con el robo de la bebé del hospital Santojanni, vuelven a conmover a la opinión pública acerca de un tema que, lamentablemente, viene de larga data en nuestro país. El mismo se refiere al tráfico de menores, raptos y/o sustracción.

Si bien no podemos afirmar cuántos niños se venden en la Argentina, ya que ello implicaría conocer "las bandas" que se dedican a traficar, podemos sí decir sin temor a equivocarnos que de acuerdo a los informes de Amnesty, además de los chicos que se venden en el país hay entre 4.000 y 40.000 niños argentinos exportados al Primer Mundo en los últimos diez años.

Un trabajo de Defensa del Niño Internacional y Ministerio de Salud y Acción Social reveló que la demanda de bebés de aspecto europeo se concentra principalmente en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.

En Estados Unidos se ha visto por TV un spot televisivo con bebés recién nacidos, una voz en off advertía que no se trataba de un anuncio de artículos para niños sino "para adquirirlos de todos los tamaños y colores".

Especialistas en la materia de las Naciones Unidas postulan que los bolsones de marginalidad que van dejando los severos planes de ajuste aplicados por muchos gobiernos del Tercer Mundo son caldo de cultivo para que la agencias de adopción internacional se instalen y crezcan.

En otro orden de cosas, los hospitales de Buenos Aires son zona de riesgo para las mujeres solteras embarazadas y de bajos recursos porque operan organizaciones que venden a recién nacidos, incluso con complicidad de algunas personas que trabajan allí.

En el orden internacional el tema del tráfico encuentra su fundamento en el derecho a la identidad, que se halla especialmente reconocido por el artículo 7º de la Convención de los Derechos del Niño, el que textualmente dice: "1. El niño será registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde éste a su nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación na-

cional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida".

La República Argentina asumió la responsabilidad que le cabía en la redacción de la norma antes mencionada, por los hechos acaecidos en nuestro país en ocasión del proceso militar, quedando como saldo alrededor de 500 niños desaparecidos.

Desde otro punto de vista, la sanción de la Ley Nacional de Creación del Banco de Datos Genéticos producía el hecho histórico de incorporar al cuerpo jurídico del país los avances científicos en la materia puestos al servicio de la reivindicación ética del derecho a la identidad.

Asimismo, en el VII Congreso Mundial de Derecho de Familia, celebrado en El Salvador (19, 20 y 21 de septiembre de 1992), se recomendó la incorporación a la agenda de trabajo de la Convención de La Haya que se celebrará este año, el tema de tráfico de menores en el aspecto del derecho penal. Es por ello que en nuestros proyectos nos hemos concentrado en la penalización de las bandas dedicadas a traficar menores, ya que son ellos quienes se enriquecen con la necesidad de una pareja en ser padres y la victimización de madres muchas veces solas y sin recursos.

Es nuestra responsabilidad y así lo asumimos, abocarnos a evitar que nuestros hijos sean reducidos a la calidad de cosas comprables y vendibles. Así lo sostenemos en el presente proyecto, del que desde ya solicitamos su aprobación.

Fernando de la Rúa.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: éste es un tema que ha sido largamente debatido y demorado, tal vez atento a que mucho tiempo antes los señores senadores que presentaron proyectos pudieron considerar un poco la actividad casi en mora del Senado de la Nación.

Creo que es bueno decir que este dictamen de comisión reconoce como fuente distintos proyectos presentados por los senadores Lafferrère, Romero Feris, Molina, Rivas, de la Rúa y, anteriormente, uno del señor senador Brasesco que también abordaba de alguna forma este tema.

En particular la comisión ha llevado a cabo una serie de consultas a través de las cuales cada uno de nosotros tuvo oportunidad de informarse con la opinión de calificados tratadistas y hombres conocedores del tema.

Baste decir, señor presidente, que la comunidad argentina hizo sentir su real preocupación fundada en la urgencia y necesidad de atender lo

que es un vacío legal; esto, más la serie de proyectos a los que hice referencia, nos hizo formular sucesivamente una serie de interrogantes que han sido motivo de análisis y fueron resueltos en el dictamen de comisión.

En principio esta comisión se planteó la inquietud de si existía un vacío legal en materia de tráfico de menores o no. En caso afirmativo, si era necesario que el derecho penal incriminara una ilicitud de esta naturaleza. En el caso de seguir la tesis de penar la compraventa o el tráfico de menores, analizamos cuál sería el bien jurídico a tutelar por la norma a crearse.

De acuerdo con la metodología que cada señor senador utilizó en su proyecto, la pregunta planteada era si se imponía la creación de un capítulo nuevo dentro de los delitos contra las personas que previera el tráfico de menores; asimismo, si este nuevo delito lo era contra el estado civil, contra la libertad o contra la familia.

También nos preguntamos si era razonable incriminar a aquellos padres que voluntariamente entregaran a sus hijos por un estado económico de necesidad apremiante que les impidiera su manutención.

Del mismo modo, nos cuestionamos si penar a las personas que intervienen en todos los elementos o eslabones de la cadena de tráfico de niños implica desconocer circunstancias atenuantes en el supuesto de que se dé la situación planteada en la inquietud anterior.

Si concluíamos que había un vacío legal en la materia era necesario modificar o agregar algún artículo al Código Penal.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, senador Conrado Storani.

Sr. Alasino. — También nos preguntamos si la represión del tráfico de menores debía estar considerada en el capítulo de los delitos contra el estado civil —como expresé recién—, habida cuenta de que quienes trafican menores tratan de suprimir una filiación para dar otra; y si convenía en algunos casos específicos vedar el beneficio constitucional de la excarcelación a aquellos involucrados en este tipo de delitos.

Debo decir, señor presidente, que todas estas cuestiones también tienen que ver con la preocupación instalada en la comunidad, y respecto de la cual tenemos la obligación de avanzar en materia penal. Venimos insistiendo en mantener un derecho penal que dé garantías y no avanzar más allá de las figuras que suponen una necesaria punición. La obligación del legislador con-

siste en distinguir las situaciones para no terminar penando o penalizando lo que no corresponda.

Lo cierto es, señor presidente, que por medio de la ley 23.849 de septiembre de 1990 la República Argentina incorporó al derecho positivo vigente la convención sobre Derechos del Niño, que la Corte y nuestros tribunales tienen obligación de aplicar.

Esta convención —en opinión de esta comisión— incorporó a su vez algún tipo de valores o bienes a proteger jurídicamente que en el Código Penal no figuraban. La Convención sobre Derechos del Niño avanza en dos cuestiones fundamentales: proteger intrínsecamente la vida del niño y proteger su derecho a la identidad, bien este último jurídicamente hasta hoy no protegido y que queremos tutelar.

La identidad tiene que ver no con un derecho nuevo pero sí con una nueva captación de la misma como valor que hasta ahora tal vez no estaba tratado con el rigor que le queremos dar.

En la Argentina la identidad se tornó importante en la década trágica del gobierno militar.

Creo que durante mucho tiempo la alteración de la identidad atacó a familias de extracción social baja, porque de alguna manera se burlaba la identidad real de los niños cambiándoles el nombre y el apellido y poniéndoles en su cabeza otra identificación. Por obra y gracia de la Doctrina de la Seguridad Nacional esta adulteración de la identidad se incorporó a otros sectores de la comunidad nacional.

Asistimos entonces azorados a los cambios de identidad de muchos niños. Vimos cómo las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo empezaron su peregrinaje para recuperar esto que hasta ayer no era intrínsecamente valioso para nosotros.

Así, a los argentinos el tema de la identidad nos toca mucho más de cerca, porque además de estar relacionado con aquellas viejas connotaciones a las que hacía referencia se vincula con estas otras recientes, de la represión de la época militar. Por estas razones, tenemos la obligación de avanzar para protegerla.

La identidad adquiere otra dimensión. No se trata ya solamente del estado civil sino que es omnicompreensiva del estado civil. El estado civil empieza a ser una parte de la identidad y ésta comienza a tener otra identidad jurídica y moral, que es la que queremos incorporar.

Creo que éste es un punto novedoso, contenido en algunos proyectos como el presentado por el señor senador Lafferrière. Para ser ho-

nesto, está en su iniciativa. Por tratarse de un nuevo elemento valioso lo hemos incorporado en el título sobre supresión del estado civil.

Ahora bien, este problema tiene muchas connotaciones. Se trata pues de cómo abordamos el tema, que es muy complicado.

Hemos arbitrado todas las medidas necesarias para tratar de no cometer errores en la incorporación de estos nuevos tipos penales. Intentamos acercarnos al problema para tratar de aprehenderlo. Lo último que hemos hecho en el día de hoy es tomar contacto con el presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, doctor Hernández, a quien he advertido de las dudas que según nosotros puede contener este proyecto.

Creo que se trata de una iniciativa importante que introduce cambios en el Derecho Penal y que hace falta. He advertido a la Cámara de Diputados para que extreme el estudio de esta iniciativa que proviene del Senado, que deja un poco de lado el dictamen de preferencia que ellos tienen para tratar.

Aprovecho para aclarar que con el doctor Hernández me une un conocimiento de estudiante. Además, lo reconozco un hombre estudioso del tema.

La idea sería que este proyecto, tal como llegue a la Cámara de Diputados, sea estudiado y se trate de corregirlo, por aquello de que varios pares de ojos ven más que uno. Se tendrá que estudiar de qué manera se puede corregir o controlar esta iniciativa y, con este mecanismo, podremos comprobar cómo el control de las dos Cámaras sirve específicamente para esta cuestión. Esto, por supuesto más allá del propio control que hayamos hecho en la comisión y el que haga cada uno de los señores senadores aquí mismo en el recinto.

En principio, no hemos decidido incorporar un nuevo capítulo en el Código Penal, tal como era la propuesta de algunos de los proyectos, como el del señor senador Romero Feris. Hemos decidido mantener la actual nomenclatura del Código Penal, la actual distribución de capítulos y hemos incorporado modificaciones en algunos artículos y en otros creado algunos tipos penales autónomos donde entendíamos que existía un vacío legal.

Obviamente, también hemos creado la identidad como un tipo autónomo y una protección novedosa para la identidad.

Hemos intentado mantener la relación de penas. Como los señores senadores saben, el

Código Penal tiene un esquema —una economía punitiva— de penas y a medida que va pasando de un bien jurídicamente protegido a otro que la comunidad cree que tiene menor valor —por ejemplo, la vida frente al honor y la vida frente a la honradez—, lo valúa y le asigna penas menores.

Hemos tratado de mantener este esquema y hemos superado la exigencia pública de aquellos que, tal vez por no tener un conocimiento con mucho rigor del Código Penal, piden un gran aumento de las penas, suponiendo que de esta manera se corregirían las deficiencias estructurales que tiene la comunidad argentina en el tratamiento de la minoridad y que es debido a la existencia de ellas que se producen los delitos en su gran mayoría.

Por esta razón, no hemos incorporado excesivas penas. Más bien tratamos de no romper la economía del Código y de atender los reclamos que realmente hace la comunidad frente a estos problemas.

Fundamentalmente, hemos querido dar a la comisión de estos delitos una escala de pena que tenga algún tipo de relación con otras similares que en la misma dirección mantiene el Código Penal.

Hemos creado un tipo autónomo en la protección de la identidad y superado el vacío legal — así lo entiendo— que existía específicamente con respecto al tráfico de menores o la intermediación.

Con relación a esta última figura hemos incorporado una gran gama de elementos para que queden captadas casi todas las posibilidades o aparentes posibilidades en la forma de comisión de delitos. Cuando discutamos el proyecto en particular tendremos la oportunidad de analizar esta cuestión en profundidad. Pero adelanto que ésa ha sido la intención de la comisión cuando empezamos por punir fundamentalmente la intermediación y todas las formas de facilitarla o promoverla.

Hasta hoy el Código Penal tenía previsto el caso de la sustracción de menores, del robo de menores. Al respecto, hemos agravado la pena. Consideramos que las nuevas conductas que aparentemente surgían no estaban captadas y que por allí había una especie de filtración con respecto a la sanción penal de todas estas actividades, a veces asociativas y la mayoría de ellas ilícitas, que es lo que se conoce como "banda", o la asociación ilícita que de pronto promovía o facilitaba el tráfico de menores, no sólo nacional

sino también internacional. Esta es una preocupación que se ha instalado en otras iniciativas de distintos senadores.

Respecto de la falsificación material e ideológica de documentos, hemos incorporado a los certificados de parto y de nacimiento dentro de los que deben ser protegidos, habida cuenta de la relación que tienen con el tema de la identidad. Tales documentos son reconocidos por el Código Civil, el que les otorga un valor probatorio de filiación y nacimiento. Hasta ahora no estaban protegidos por el Código Penal porque no se los colocaba a la altura de los demás instrumentos públicos que sí son protegidos por dicho Código. Entonces, hemos resuelto incorporar a los certificados de parto y de nacimiento que otorgan los médicos y las parteras por las connotaciones que tienen con la identidad de las personas.

Con esta iniciativa hemos querido dar a la identidad un nuevo valor, una nueva entidad en el Código Penal; por ello debemos atender todos los temas que tengan relación con el hecho de probar o acreditar la identidad.

Es cierto que del reconocimiento que el padre voluntariamente hace de su hijo ante el Registro Civil nace la filiación; pero también es verdad que hay instrumentos, como el certificado de parto o el de nacimiento, que dan fe por sí mismos del hecho de la filiación. Precisamente, tales documentos son a veces los que se hacen desaparecer para cambiar la filiación de un niño. Entonces, los elevamos a la categoría de instrumento público en el Código Penal, tal como son considerados en el Código Civil. De esta manera vamos avanzando en la protección del nuevo valor de la identidad a través de la categoría que daremos a estos documentos.

En otro orden de cosas, nos animaba la intención de cambiar las reglas de la tentativa, en lo relacionado con la participación.

Hemos discutido largamente este asunto en la comisión con los asesores de los señores senadores. La tentativa, como ustedes saben, es la actitud de una persona que tenía la intención de cometer un delito y que, voluntariamente, antes de llevarlo a cabo, desiste de él. El Código Penal, por decirlo de alguna manera, premia tal actitud reduciendo la pena que le hubiere cabido a una persona que pensaba cometer un determinado delito y desiste de él.

Por las circunstancias públicas vinculadas con este tema, se nos había instalado la idea de evitar

el beneficio de la tentativa a quienes pretendieran cometer esos actos sobre menores de diez años de edad.

Una observación atinada del señor senador de la Rúa y un replanteo del tema en la comisión nos ha hecho revisar este asunto. Sin embargo, el proyecto mantiene su redacción en este punto. Cuando realicemos la discusión en particular vamos a proponer la respectiva modificación, según la opinión de la comisión.

El último tópico considerado por este proyecto se refiere a la modificación del Código Procesal Penal de la Capital Federal. Los señores senadores deben saber que en materia procesal las provincias mantienen su autonomía, por lo que cada una de ellas tiene su propio ordenamiento; es decir, la Nación tiene el suyo y cada provincia también. Esto es así por disposición de la Constitución Nacional.

En este proyecto proponemos la modificación del Código Procesal Penal de la Capital Federal, es decir, el de la Nación. Para ello nos ha animado el reclamo que muchas veces plantea la gente cuando se ve agredida en su moral por este tipo de delitos que calan muy hondo en el corazón de la comunidad.

Hay una frase que se ha hecho pública que dice que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Y a veces se dice: tenemos una ley muy benigna, no tenemos una ley que proteja. Y esto no es así. En primer término, para nuestra legislación, toda persona se presume inocente hasta que se demuestra su culpabilidad; es un principio del derecho penal liberal, consagrado en la Constitución.

Otro punto de vista es que se dispone que: todos aquellos delitos menores, con pena menor, permiten al juez conceder a los que aparentemente los cometen —digo aparentemente, porque el proceso es una situación provisoria y no definitiva de la conducta del reo— que permanezcan fuera de los establecimientos de detención mientras dura la tramitación del proceso. Me refiero a la excarcelación para los delitos de hurto, robos menores o amenazas. Incluso, para el caso de tráfico y de supresión del estado civil, un delito menor del Código Penal, el juez permite al procesado que quede fuera de la cárcel o de la prisión mientras se tramita la causa. Esto es lo que se conoce como excarcelación. Cuando hay delitos que agreden a la moral, la gente se siente indignada porque el imputado está afuera mientras dura el proceso. Y la forma de que en el derecho penal se pueda corregir esta situación es elevar muchísimo las penas de estos delitos, lo

cual no se corresponde con la economía del Código ni con el orden en que el Código protege valores como la libertad, la vida, el honor, la propiedad.

Entonces, hemos intentado hacer la corrección por esta vía, modificando el Código Procesal Penal e impidiendo la excarcelación. Es decir que, a pesar de que el acusado esté en una situación tal que el juez de origen pueda permitirle estar fuera del lugar de detención durante el proceso, hemos intentado que se haga una excepción de modo que, cuando las víctimas sean menores de diez años, el juez esté impedido de conceder el beneficio de la excarcelación.

Adelanto que todo esto es opinable. He recibido de parte de algunos señores senadores notas por escrito en ciertos casos y menciones verbales en otros, indicando preocupación sobre este tema. Evidentemente, en muchos casos se trata de la opinión y captación ética que cada uno tenga acerca del valor que supuestamente estaría conculcado respecto a los delincuentes. Por eso tomé la precaución de conversar con los señores legisladores en cuanto al control estricto que debe haber sobre este tema, con el objeto de que se pueda atender el reclamo de la gente, el vacío legal que existe, y considerar el valor de la identidad, que debemos proteger. Asimismo debemos tener en cuenta también las relaciones habituales, naturales que se presentan entre el Código Penal, los códigos procesales y el juez con aquellos detenidos que se encuentran a su disposición para que podamos atender, con los menores costos, riesgos y daños posibles —siempre hay un margen de daño—, la necesidad que hoy se nos plantea desde la comunidad.

Dejé para lo último un breve comentario y una modificación importante que hemos incorporado. Solamente haré una exposición muy general para debatir el tema puntualmente durante la discusión en particular. Me refiero al infanticidio, figura acerca de la cual el Código Penal atenúa —digamos así— o morigerla la sanción a la madre, a los hermanos, a los padres por la muerte que se produzca sobre un recién nacido bajo particulares circunstancias, en ciertas condiciones y con determinados fines.

Entonces, el valor vida, que es el que más protege el Código Penal, cede un poco en su envergadura en el caso específico del infanticidio. Concretamente, el infanticidio es una figura penal en la cual a la madre que mata al hijo en un determinado lapso y para defender su honor, se le reduce la sanción. Esto es opinable:

En nuestro Código Penal también se avanza en el tema de los padres y hermanos que maten al nieto o sobrino en este lapso.

Nuestra legislación referida al infanticidio reconoce algunas fuentes que, en mi opinión, han dividido largamente a los tratadistas de derecho penal. Tal vez haya quienes con más autoridad que yo puedan opinar sobre el particular, pero me voy a animar a hacerlo muy brevemente.

En nuestro viejo Código Penal el lapso durante el cual la madre o el padre podían cometer este delito era de tres días. Modificaciones posteriores cambiaron ese término a un espacio de tiempo indeterminado que nace de la definición de estado puerperal. Este es un estado en el que se produce una alteración psíquica de la mujer, que se inicia después del parto y comprende un lapso que todavía nadie puede determinar con precisión, aunque algunos sostienen que puede durar hasta cuarenta días, y presenta connotaciones en el Código Penal que pueden abordarse desde dos puntos de vista. Según la mayoría de los tratadistas, simplemente tiene connotaciones temporales. En esta posición se inscriben Soler y un gran grupo de penalistas. Ellos sostienen que el Código Penal sólo se refiere a un espacio de tiempo en relación al estado puerperal.

Frente a esa posición está la opinión de nuestro maestro cordobés, el doctor Núñez, quien decía que existía una doble connotación: no solamente temporal sino de alteración realmente psíquica de la mujer. Esta alteración psíquica es la que, tal vez, no le hace comprender cabalmente la criminalidad del acto que comete. Se plantea así un primer interrogante: ¿por qué se incluye a los padres, hermanos o tíos si sólo se refiere a la mujer?

Existe un segundo tema: el estado puerperal es de muy difícil comprobación; puede ocurrir o no. Si no ocurre, para qué mantener un espacio de tiempo arbitrario durante el cual se atenúa la pena. En este caso, no se justifica.

Sin embargo, la modificación de tres a cuarenta días en la extensión del estado puerperal se incorpora en el Código Penal a través de la legislación suiza. El estado puerperal era una característica para medir temporamente esta situación de la mujer en el Código Penal suizo, que toma el Código Penal argentino. Pero no conforme con ello, también se le incorporan, por otra vía, las connotaciones relativas al honor, del derecho español. Así, se decía que además de producirse el delito en el puerperio, el acto debería tener por objeto la defensa de la honra de

la mujer, de la hija o de la hermana. Entonces, si se daban estas dos condiciones —el espacio de tiempo más la honra— tenía aplicación este atenuante.

Durante mucho tiempo se ha criticado esta figura. Algunos decían que era el resultado de una sociedad excesivamente paternalista y protectora, de una moral victoriana, donde dentro de la axiología social se bajaba de nivel el valor vida para subir el valor honor. Entonces, el honor resultaba más importante que la vida, y ante la consideración pública se protegía de un espectro social condenable a la mujer que daba a luz en situación de soltería.

Evidentemente esto ha cambiado; la forma como la sociedad captura este valor no es más la misma; y evidentemente creo que por allí ni la honra ni el honor se comprometen en la actualidad como tal vez ocurría en 1921. Pero también es cierto que en algunos casos puede ser así. Esta opción tan difícil es la que vamos a definir porque puede ser que en algún caso en particular sí exista el estado de puerperio y una enorme consideración del honor por parte de una mujer que resuelva matar. Esta es la opción.

Ahora bien, ¿por qué nosotros no hemos optado por la fórmula de Diputados en la que se eliminó a los padres y a los hermanos, por un lado y, por el otro, se aumentó la pena por el infanticidio cometido solamente por la mujer? En el dictamen actual de Diputados se produce un disloque mayor y más grave. Esto lo observamos detenidamente en la mañana con algunos señores diputados. En el afán de corregir este importante error —y al ser algo que puede ocurrir— se sanciona, digamos, con menor pena este delito que el aborto. Entonces, en vez de abortar, a la mujer le conviene parir y matar a su hijo después, ya que la sanción es menor. Por eso sostengo que hay momentos en que debemos optar y ver cómo funcionan las cosas; qué es lo que queda para atender esta situación es cierto de irregularidad, o no, o dicho de otra manera, de excepción en que sí puede estar conculcado en gran envergadura el honor de una mujer.

Para mí siempre cabe la posibilidad de que las alteraciones morbosas en la mujer en estado de puerperio sean tan importantes que el hecho realmente se produzca, pueda probarse, y que por vía del inciso primero del artículo 34 —excusas absolutorias— el juez atienda esta situación y la exima de pena. Lo que sí es cierto es que sería eximida en todo o no eximida. Entonces, o prueba y se exime de toda pena o no prueba nada y queda con homicidio agravado.

Considero que estos aspectos son de gran importancia. Quiero que el tema lo tratemos en forma muy desapasionada porque realmente es una cuestión trascendente. En este dictamen nosotros tomamos posición; bien o mal —nosotros consideramos que bien— tomamos una posición definida. De alguna manera intentamos armar un proyecto que afecte el Código Penal lo menos posible, que permita corregir algunos aspectos manteniendo la economía del código pero atendiendo a esta nueva realidad de los valores que aparecen a fin de atender esta nueva realidad de la axiología vigente en la sociedad argentina y proponer una reforma que sea el punto de partida, de una vez por todas, en la lucha por terminar con el flagelo que en sí constituye el tráfico de menores.

Para terminar —voy a dejar para el tratamiento en particular la discusión de algunos aspectos puntuales— quiero decir que nuestra comisión se retrasó en elevar su dictamen no por simple mora, sino porque el tema es excesivamente complicado. Tuvimos la oportunidad de realizar consultas con los integrantes de un panel en el que participaron calificados hombres del derecho penal. Por supuesto, respetamos sus opiniones y en alguna medida intentamos contemplarlas en el texto finalmente elaborado.

Lo último: la Cámara de Diputados deberá estudiar esta cuestión en cuanto a si hemos hecho bien o mal al incorporar a la madre en la figura del tráfico. Esto quiere decir que, respecto de la madre, también brindamos margen para que el juez la sancione por ser un eslabón más del tráfico de menores, obviamente, siempre que sea voluntario.

Hemos tenido en cuenta la opinión de viejos y conspicuos jueces de menores que dicen que toda la estructura delictiva se monta en dos cuestiones. Por un lado, incorporar en la estructura a un tipo que no sea punible para que el día en que se descubra el delito nadie cargue con las culpas y salgan todos libres. Por eso se incorpora a los menores en las bandas dedicadas a estos hechos. Entonces, como los menores tienen un beneficio especial en el tratamiento penal, cuando se descubre la asociación ilícita se le carga la culpa al menor, que puede ser un avezado delincuente, pero justamente por su condición de menor es posible burlar toda la acción represiva del Código Penal.

Por el otro lado cuando estudiamos en comisión este tema llegamos a la conclusión de que en el caso de la mujer podría suceder lo mismo. Si nosotros no incrimináramos esta actitud de las

mujeres, podríamos dejar la puerta abierta para que por allí se evadiese la comisión del delito. Si se carga toda la culpa sobre la mujer, al no ser punible, sería prácticamente imposible atrapar a los verdaderos delincuentes. Pero aquella mujer o aquel hombre que realmente en estado de necesidad entregasen al menor deberán probar que lo hicieron por esa circunstancia. Y por el artículo 34 del Código Penal —no por una excusa absoluta sino por una causa de justificación— se podría determinar la antijuridicidad de los hechos y, por ello, no caería sobre la mujer la sanción penal.

De todos modos, será una ardua tarea para el abogado defensor probar que la entrega del menor se debió a una situación atendible, como puede ser una cuestión de subsistencia, que podría estar contemplada en las eximentes del Código Penal.

Estas y otras modificaciones sobre las que abundaré en la discusión en particular dan origen al dictamen de la comisión.

Para terminar, quiero agradecer a los asesores de los señores senadores que tan pacientemente han trabajado en este tema. Además, hemos contado con la valiosísima cooperación individual de cada uno de los señores senadores, que corrigieron poco a poco el dictamen, así como también con la de quienes invitamos y perdiendo parte de su tiempo vinieron a este Senado para informarnos acerca de sus puntos de vista. Todos ellos, con su actividad y sapiencia intelectual han contribuido, de alguna manera, a promover la elaboración del dictamen por parte de la comisión.

Sr. Presidente (Storani). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: veo que quedan tres minutos para pasar a cuarto intermedio, razón por la cual no sé si es conveniente que comience ahora mi exposición.

Sr. Presidente (Storani). — Así es, señor senador, dado que faltan tres minutos para pasar a cuarto intermedio, le sugiero que comience su exposición en la reunión de mañana, cuando reanudemus la sesión.

Sr. de la Rúa. — No tengo inconvenientes, señor presidente.

Sr. Presidente (Storani). — En consecuencia, se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 16.

—Son las 21 y 14

MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.